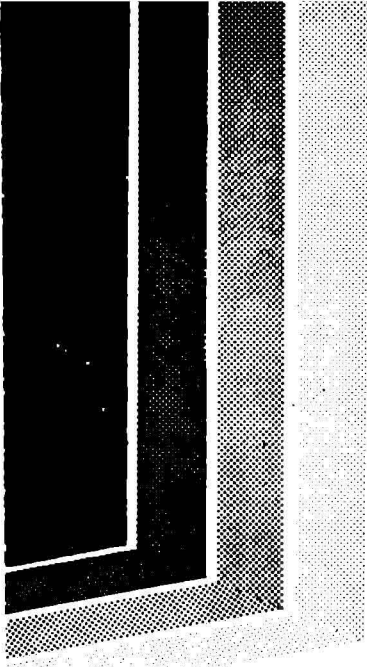




HUMANIZAR EL CONFLICTO



En El Salvador existe ya un gravísimo conflicto armado, y nadie se extrañaría si desemboca en una guerra abierta. La secular opresión a las mayorías bajo diferentes regímenes políticos se ha ido convirtiendo en represión generalizada y, bajo el régimen actual, en genocidio. La respuesta del pueblo a la opresión y la represión ha sido su propia organización, los diversos tipos de lucha, populares, sociales y políticas y, en estos momentos, también la lucha armada. A medida que los diferentes gobiernos han mantenido proyectos antipopulares ha aumentado la consolidación de la organización del pueblo y la polarización entre gobierno y fuerzas populares.

En el presente el proceso de polarización se ha consumado. Por una parte el proyecto del actual gobierno, sustentado por la Fuerza Armada y apoyado sustancialmente por la derecha, tiene como uno de sus objetivos reales, o al menos como una de las condiciones reales para subsistir, la eliminación de la izquierda. Por otra parte, el proyecto del Frente Democrático Revolucionario, que aglutina a sectores populares, democráticos y revolucionarios, pretende derrocar al gobierno. La polarización, por lo tanto, aparece entre dos proyectos que son cada vez más excluyentes e históricamente irreconciliables.

Esta polarización ha entrado claramente en una fase de lucha armada, de hecho y de derecho. De derecho, porque así lo han manifestado ambos protagonistas. La Fuerza Armada afirma constantemente que está dispuesta a combatir con las armas no sólo para defender aquello a lo que le obliga la Constitución, sino el actual proyecto político, que no es lo mismo. El FDR declara públicamente que se le ha impuesto la guerra como único medio posible ya para dar verdadera solución a los problemas del país.

Pero independientemente de estas declaraciones están los hechos. En lo que va del año el número de víctimas oscila entre los 12.000 y los 15.000. Alrededor de dos tercios de las víctimas pertenecen a la población civil y son causadas por la represión del ejército, de los cuerpos de seguridad y de las bandas paramilitares de derecha. El resto de víctimas se producen por enfrentamientos militares entre las organizaciones político militares de izquierda y el brazo armado del gobierno, y por los ajusticiamientos que aquéllas llevan a cabo contra delatores, miembros de ORDEN etc. Este elevadísimo número de muertos expre-



sa una situación de guerra y no simplemente de violencia. Su interpretación correcta sólo puede ser que se está llevando a cabo una guerra y no simplemente venganzas personales o grupales. No es de extrañar que las agencias noticiosas hablen ya de "guerra civil" en El Salvador.

En varias ocasiones esta revista ha analizado las causas últimas de este conflicto y ha dado su juicio político, ético y cristiano sobre él. Ha declarado como más racional y viable para el país el proyecto popular que el del actual gobierno. No se trata ahora; sin embargo, de repetir esos análisis y juicios, sino de reflexionar sobre el actual conflicto armado y sobre la guerra aparentemente inevitable. Lo que queremos expresar en este editorial es el llamado urgente a los contendientes a que humanicen el conflicto armado ya ahora y en una verosímil situación de guerra abierta.

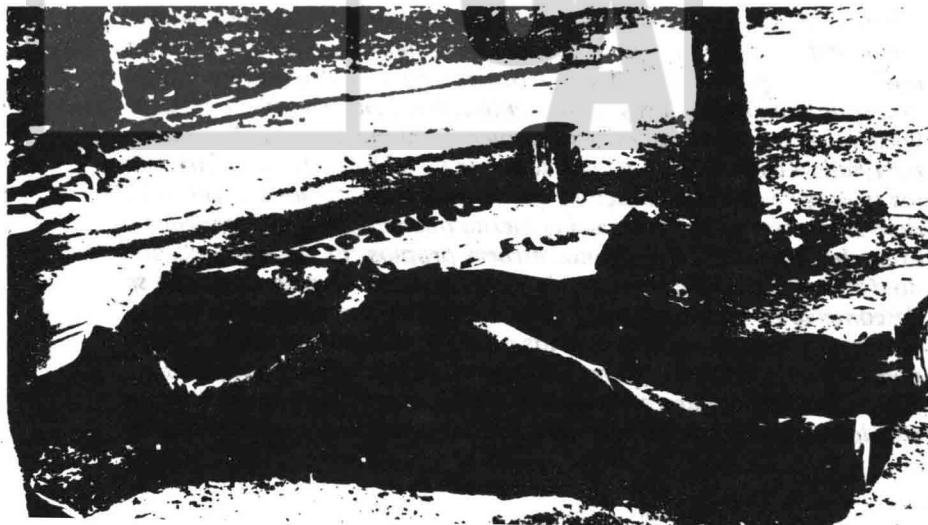
Quizás extrañe o escandalice este planteamiento, como si supiera abandonar todas las esperanzas de una paz inmediata o echar más leña al fuego. Existen, ciertamente, quienes con buena voluntad o por ingenuidad o ignorancia, siguen llamando a un diálogo inmediato a los contendientes para conseguir la paz. Existen además las declaraciones de algunos gobernantes que contra toda evidencia empírica hablan de que ya se ha entrado en un período de pacificación, que se consumará prontamente. Pero aunque ocurriese el improbable milagro de un diálogo o una pacificación por eliminación de la izquierda, nada de ello exime de la responsabilidad de analizar la profunda deshumanización que el actual conflicto ya lleva consigo y de exigir la humanización de dicho conflicto, que se haría aún más apremiante en el caso de una guerra abierta. La sabiduría humana y cristiana ha asumido esa responsabilidad por experiencia histórica acumulada. Por ello existe una legislación e incluso una doctrina teológica sobre la guerra. Existe porque, desgraciadamente, conflictos armados y guerras son algo tradicional en la historia de los hombres. Y existe para minimizar en lo posible la deshumanización inherente a todo conflicto armado. Llamar a la humanización del conflicto y de la guerra es pues una exigencia trágica, pero no por ello menos necesaria. No hacerlo en estos momentos sería una irresponsabilidad imperdonable.

Guiados por esa responsabilidad veamos en primer lugar lo que hay de justo e injusto y, sobre todo, de humanizador y deshumanizador en el actual conflicto. El actual gobierno está llevando a cabo objetivamente una guerra que en sí misma es injusta porque no sólo no favorece un mayor bien común, sino que genera el paulatino exterminio de la población civil. Y además la está llevando a cabo de una forma deshumanizante. No podemos excluir que haya miembros en el actual gobierno con buena voluntad subjetiva, que vean su participación en él como una forma adecuada de solucionar los problemas del país. Pero al margen de la posibilidad de una bondad subjetiva, la objetividad del proyecto es profundamente deshumanizante, como claramente se muestra en los hechos en que se materializa ese proyecto.

El dato primario para este juicio es el número de muertos atribuibles, directa o indirectamente, pero atribuibles en su conjunto al actual gobierno. Teóricamente un gobierno legítimo puede hacer uso de las armas para autodefenderse. Pero el número de muertos y la forma de matar, además de poner en cuestión la legitimidad del gobierno, le están deshumanizando. El matar se está convirtiendo en el primer

recurso para prevenir el crecimiento de la oposición y para responder a las acciones y provocaciones del pueblo. No se usan otros métodos de autodefensa, sino que se mata directamente como primer y —cada vez más— como único recurso. Se mata indiscriminadamente y a mansalva, sin hacer esfuerzos por distinguir entre contrincantes armados y población civil, que cae víctima de bombardeos y gigantescos operativos militares. Cada vez con más frecuencia las víctimas de la represión aparecen cruelmente torturadas antes de ser asesinadas. La conclusión es que todo vale con tal de eliminar a los opositores y con tal de aterrozar para prevenir un fortalecimiento de la oposición.

*Si todo vale al nivel fundamental de quitar la vida, cuánto más valdrá todo a otros niveles de la vida ciudadana. Secularmente han estado éstos corrompidos. Pero el encubrimiento de la represión descrita necesita todavía una mayor corrupción, y la represión, tal como es llevada a cabo, lleva en su propia dinámica el desprecio absoluto por todo lo que sea humano. Así, no se respetan ya lo que tradicionalmente han sido símbolos de seguridad e inmunidad: centros docentes, locales sindicales y de partidos políticos y, sobre todo, hospitales y templos. Para cumplir tal represión se necesita forzosamente manipular los medios de comunicación social, censurarlos, ponerlos en cadena, y silenciar por otra parte —pero ni siquiera por medios legales, sino con bombas y asesinatos— aquellos medios que disientan o simplemente digan la verdad y la interpretan de forma distinta a la del gobierno. Se necesita tergiversar la verdad o mentir en los comunicados oficiales del gobierno y de la Fuerza Armada. Se necesita facilitar y fomentar la delación entre el pueblo. Se necesita corromper la administración de la justicia, siempre que haga falta, negando el derecho de **habeas corpus**. Se necesita una legislación que paulatinamente vaya recortando los derechos ciudadanos, imponiendo Estados de Sitio sucesivos y leyes de emergencia. Se necesita intervenir militarmente universidades, catear sistemáticamente colegios y sindicatos. Se necesita asesinar precisamente a quienes tradicionalmente han sido símbolos de humanización, como maestros, médicos y sacerdotes. Se necesita rematar heridos en los hospitales. Se necesita buscar apoyo y ayuda en países que paladinamente afirman la prioridad de sus intereses vitales sobre los intereses de El Salvador.*





Todas estas acciones no son sólo en su inmensa mayoría injustas, sino que provienen de un germen profundamente inhumano, y extienden la inhumanidad de la represión a todos los órdenes de la vida. De esta forma el mismo gobierno y su brazo armado se deshumaniza cada vez más, se insensibiliza hacia los mayores crímenes y cae en la espiral de la deshumanización a todos los niveles de su gestión. De esta forma también el gobierno provoca objetivamente a la izquierda, que sin un fuerte autocontrol tendrá la tentación de responder con la misma moneda. Y por último, deshumaniza a todo el pueblo, introduciendo en su conciencia colectiva patrones de conducta similares o provocando el deseo de venganza. Todo ello se agrava porque es precisamente el gobierno la institución nacional a quien le corresponde salvaguardar los derechos de todos los salvadoreños y quien debiera dar ejemplo en propiciar la realidades justas y los valores humanos de todos los salvadoreños.

La izquierda por su parte ha supuesto en primer lugar un fenómeno de humanización para el país, tanto por desenmascarar eficazmente la secular injusticia en el país y defender una solución que garantice mejor la justicia y la paz, como porque en sus luchas hay profundos valores humanos y humanizantes. En efecto, la carga ética de sus luchas, su mayor cercanía y solidaridad con las mayorías populares, la generosidad en el sacrificio y en ofrendar sus propias vidas por la liberación del pueblo, los medios sustancialmente pacíficos de los que ha usado como primera medida, la firmeza en la lucha a pesar de la desproporción de medios y el frecuente control en responder a las provocaciones de la represión, son elementos humanizantes. Pero también ha ido aumentando paulatinamente su lucha violenta, y con ello los riesgos de deshumanización. Causa muy importante para ello es la represión descrita por parte del gobierno que objetivamente provoca y exagera, pero también algunos errores propios. Es deshumanizador no dosificar la violencia necesaria y aun justa de modo que aquella se des controle en ocasiones, originando excesiva destrucción. Es deshumanizador cuando se abusa de los ajusticiamientos que en ocasiones podrán ser justificados como autodefensa y podrán ser juzgados según la ética de la guerra. Pero la masividad de ciertos ajusticiamientos, los errores al asesinar a personas inocentes, las ejecuciones tras

juicios sumarlísimos —cuando precisamente, por contraposición, la administración de justicia, aun la revolucionaria, debiera ser mucho más cuidadosa— pueden ser y a veces son signos deshumanizantes.

Si el análisis que hemos hecho es correcto, entonces urge humanizar el actual y futuros conflictos más graves, para bien del país en primer lugar e incluso por razones de eficacia para los mismos contendientes. Es urgente que el gobierno y su brazo armado deje de actuar como hasta ahora, si no quieren que el país caiga en un clima de total destrucción y aberración moral. Ya ahora y si estalla una guerra formal, se le debe exigir al gobierno que se comporte con el mínimo de civismo que exigen las declaraciones de los derechos humanos y la legislación internacional aprobada sobre la guerra. Se deben respetar los derechos de los combatientes y la inmunidad de la población civil, los derechos de heridos y prisioneros, las facilidades de actuación de instituciones asistenciales, la inmunidad de lugares que sirvan de refugios. Tales normas y derechos han sido elaborados contemporáneamente durante más de un siglo, se han plasmado en los sucesivos Convenios de La Haya y son reconocidos universalmente a partir de la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949. Tal recordatorio no es desgraciadamente superfluo a juzgar por la crueldad en el presente y el ejemplo, todavía reciente, de la violación de esas normas y derechos por la guardia nacional nicaragüense en la pasada guerra. Si no respeta esas convenciones internacionales, la credibilidad del gobierno decaerá cada vez más, nacional e internacionalmente, y le será cada vez más difícil gobernar, aun en caso de que triunfase, a un pueblo aterrorizado.

También a la izquierda se le debe exigir una mayor humanización. Aunque su causa es fundamentalmente justa debe hacer todo lo posible para que aparezca y se muestre como una causa más humana y con más garantías de humanizar al país en el futuro. Una manera humana de llevar a cabo la lucha tiene ya en sí el valor de humanizar a los contendientes, de introducir en el pueblo —aun a través de la lucha— valores positivos para el presente y para el futuro, de generar un capital de credibilidad para después del triunfo, que se traducirá en poder político, tan necesario para que no haya que recurrir en exceso al poder coercitivo. Tienen además el valor de capitalizar en su favor la opinión pública internacional. Urge, por lo tanto, para bien de la causa del pueblo y del proyecto popular evitar en lo posible los signos deshumanizantes y promover signos positivos, como son la superación de protagonismos en bien de la unidad, la real coordinación de fuerzas entre el sector revolucionario y democrático, la comprensión hacia el pueblo no organizado y hacia las capas medias. Es importante que ya ahora y después del conflicto se pongan claros signos de autocontrol y magnanimidad en la lucha, que ayuden a superar los instintos de venganza, que un conflicto como el actual genera objetivamente.

Exigir a unos y a otros, aunque con diversas expectativas, la humanización del conflicto no es idealismo ni ingenuidad. Lo militar tiene sus propias leyes materiales, que no pueden ser sustituidas por otras. Pero lo militar no es lo único —aunque ahora sea lo dominante— ni ahora ni en el futuro. Por ello, por conciencia ética, cristiana y por racionalidad política exigimos la humanización del conflicto, creyendo que todo lo que se invierta en humanismo dará sus frutos. Gane quien gane, más fácil será gobernar y construir al país,

cuando menor haya sido la destrucción física y el desmoronamiento moral.

Quisiéramos no haber tenido que escribir este editorial, pero era necesario por honestidad hacia la realidad y por nuestra parte de responsabilidad en humanizarla. A todos les pedimos el esfuerzo de humanización. A unos para que no caigan en el total y absoluto descrédito y no hagan todavía más cruel el camino de liberación del pueblo. A otros, para que acompañen la justicia de su causa con la nobleza de la lucha, para que el camino de la liberación y la liberación misma lleven en sí el germen de una justicia y una paz más duradera.



AMENAZA DE INTERVENCION EXTRANJERA EN EL SALVADOR

Todos los años se celebra el mes de la Independencia Patria para que revivan en nuestro pueblo los ideales de libertad, justicia y autodefinición, que animaron aquella gloriosa gesta. En este septiembre de 1980 es más necesario que nunca recordar y dar nueva vida a aquellos ideales, porque la dignidad y la independencia de la patria salvadoreña están siendo amenazadas por la intervención del gobierno de los Estados Unidos en el proceso político salvadoreño.

Es de sobra sabido que El Salvador en 1980 no ha terminado de conquistar su independencia. A la desvinculación política, militar y económica de la metrópolis colonial, el reino de España, no le siguió una toma de posesión de su destino histórico por la mayoría del pueblo salvadoreño. El Salvador quedó a merced de las potencias imperialistas, Gran Bretaña primero y los Estados Unidos después, representadas y mediadas por el poder de la oligarquía criolla. Sin embargo, en todos estos años de dependencia económica y subordinación, se han guardado las formas de convivencia internacional y se ha respetado, en lo más obvio y aparente, la soberanía y dignidad del Estado salvadoreño. De hecho, en El Salvador no hemos tenido las nefastas experiencias del intervencionismo directo del gobierno de los Estados Unidos como tuvieron casi todos los países del área: Panamá, Nicaragua, Cuba, Guatemala, República Dominicana y México.

Sin embargo, en estos momentos, el gobierno de los Estados Unidos parece haber roto sus normas tradicionales de comportamiento con El Salvador, porque ha optado por una intervención abierta y cubierta en el proceso de liberación que conduce el pueblo salvadoreño.

La intervención del gobierno de los Estados Unidos en el proceso político salvadoreño toma muchas formas. En primer lugar, el apoyo verbal en las declaraciones públicas de los funcionarios del gobierno norteamericano al proyecto político que lleva a cabo la Junta de Gobierno.

El gobierno de los Estados Unidos tiene el derecho soberano de apoyar verbalmente al régimen que más le convenga, aunque este régimen sea impopular y poco democrático. De hecho el gobierno de los Estados Unidos se alió con Stalin, protegió al Sha, apadrinó a los Somozas, fue cordial con el General Franco y apoyó solapadamente a



Africa del Sur. En todos los casos el apoyo a uno u otro régimen se basa en la mayor conveniencia para los intereses de los Estados Unidos. Esto puede suponer en algunos casos una contradicción moral para un gobierno que se hace pasar como defensor de los derechos humanos y de la "civilización occidental". Pero eso es otra cuestión.

El punto aquí es que la palabra del gobierno de los Estados Unidos tiene una fuerza objetiva, sobre todo cuando es señal y orden para que el apoyo a un régimen sea material en armas, dinero, hombres y otros recursos. Es una palabra poderosa que genera líneas de conducta en países aliados, líneas editoriales en los medios de comunicación capitalistas y líneas de crédito en los organismos internacionales que ellos controlan casi absolutamente.

De esta forma el decidido y solemne apoyo verbal a la Junta de Gobierno de El Salvador no se queda en la esfera de las palabras, ni pasa a ser una de tantas declaraciones vacías y sin efectos concretos. Es, por el contrario, un factor que provoca una reacción en cadena en toda la esfera de dominación de los Estados Unidos y que se traduce en acciones concretas de los más diversos agentes sobre el proceso político salvadoreño.

La intervención es una manifestación necesaria del radical rechazo y condena absoluta que sectores poderosos del gobierno de los Estados Unidos sienten para con el Frente Democrático Revolucionario y su proyecto de gobierno. Esta palabra de repudio conjura también una serie de acciones concretas en contra de las personas, instituciones, ideas y proyectos que configuran el Frente Democrático Revolucionario, que interfieren real y objetivamente en el proceso.

Más aún, las palabras de apoyo a la Junta y de rechazo al Frente que pronuncia el gobierno de los Estados Unidos no son solamente palabras sobre una realidad reconocida y aceptada tal cual es, son más bien palabras que tratan de modificar y alterar la realidad en sí misma. Porque las declaraciones oficiales de funcionarios norteamericanos en apoyo de la Junta de Gobierno desfiguran muchas veces la realidad de lo que está sucediendo en El Salvador, lo que la Junta es y lo que hace, así como lo que es el Frente Democrático Revolucionario y lo que pretende. El apoyo verbal es de este modo un acto de intervención en cuanto se convierte en palabra fáctica de desinformación y de propaganda en favor de una de las partes en conflicto.

Siendo la palabra del Departamento de Estado palabra poderosa que crea realidades, ha moldeado con sus medias verdades y sus falsedades enteras una versión oficial estereotipada en los medios de comunicación que domina —que son muchos y poderosos— sobre la realidad salvadoreña. Esa versión oficial y en muchos medios única, aceptada y creída por instituciones y personas que rechazarían al régimen salvadoreño actual si le conocieran realmente, se convierte en una fuente de influencias, presiones, u omisiones en torno a la lucha que libra el pueblo salvadoreño, es decir, una poderosa arma ideológica para intervenir en el proceso salvadoreño.

Pero, naturalmente, la intervención del gobierno de los Estados Unidos no se limita al apoyo verbal, la generación de un estereotipo informativo, la desinformación de sus aliados y seguidores y la difusión de los más inverosímiles sofismas. Se concretiza también en la esfera económica y sobre todo en la intervención ya estrictamente militar.

La ayuda económica que está dando el gobierno de los Estados Unidos es más política que económica. Es entre otras cosas una manera de facilitar al gobierno salvadoreño que libere fondos y otros recursos para una de las tareas principales de su proyecto que es la destrucción de las organizaciones populares. El gobierno de los Estados Unidos debería sospechar que en las actuales condiciones del país no hay capacidad para absorber productivamente los préstamos y donativos que están dando o por lo menos prometiendo. En una situación de guerra civil no declarada, pero no por eso menos real y destructiva, es objetiva y subjetivamente imposible implementar los proyectos de desarrollo o para las necesidades básicas que esos préstamos y donaciones supuestamente van a financiar. Lo más lógico y natural es que los fondos se apliquen a enfrentar directa o indirectamente los gastos de la guerra de exterminio contra las organizaciones populares. Algunos ejemplos de esta desviación de recursos por parte del gobierno salvadoreño ya ha llegado a la luz pública. De esa manera lo que se anuncia y se promete como ayuda económica para desarrollar proyectos sociales y aun populares y, de paso, para apuntalar al régimen, se convierte en las manos de quienes dirigen la guerra en una ayuda militar de primer orden. Esto no puede escaparse a los experimentados analistas de la AID y del Banco Mundial, sobre todo después de la experiencia de Vietnam.

Pero donde más se concretiza la intervención del gobierno de los Estados Unidos es en el terreno militar, porque en ese terreno es donde se libra la batalla que verdaderamente les preocupa. No tenemos evidencia precisa, pero tampoco podemos ignorar las denuncias claras y responsables acerca de la presencia de asesores militares, que generalmente asesoran con el ejemplo y la acción, en operativos militares contra grupos guerrilleros y contra la población civil sospechosa de ayudarlos. Si son doscientos, seiscientos o veinte es en sí de poca importancia. Primero, porque cualquier número inicial puede crecer hasta decenas o centenas de miles, como sucedió en Vietnam; segundo, porque, a nivel de principios, la afrenta a la soberanía y dignidad nacional se hace lo mismo con veinte intrusos que con veinte mil, aunque, a nivel práctico, esto sea, por supuesto, mucho peor.

El equipo militar que el gobierno de los Estados Unidos ha suministrado y sigue suministrando a la Fuerza Armada salvadoreña se está empleando en combatir a la guerrilla, resultando en las acciones muchas víctimas inocentes y no beligerantes.



El gobierno de los Estados Unidos declina su complicidad directa en la muerte de víctimas inocentes con la ridícula aclaración de que los equipos suministrados no son armas letales. Aunque puede que en efecto no lo sean, sin embargo, multiplican la eficiencia mortal de las armas letales, que, dicho sea de paso, son también de procedencia norteamericana. Los helicópteros, vehículos, equipo de comunicaciones y otros pertrechos bélicos han dado a la Fuerza Armada un enorme poder de movilización y han aumentado su poder de golpear al enemigo. Todo este poder mortífero, fruto de la ayuda norteamericana, no solamente se aplica a combatir a la guerrilla, lo cual hace ya a los Estados Unidos tomar partido abiertamente en el conflicto interno, sino que se aplica en una medida considerable a la represión y la supresión de la oposición política, democrática y popular, lo cual hace al gobierno de los Estados Unidos cómplice político de la dictadura militar.

Finalmente, si al nivel actual de la intervención del gobierno de los Estados Unidos en el proceso salvadoreño es ya notable, el nivel a que algunos están dispuestos a llegar es sumamente grave, a juzgar por las declaraciones del señor Pastor y las del candidato Reagan.

Parecería que están dispuestos a invadir El Salvador con soldados prestados primero y con sus propios marines si fuera preciso, emulando así las más vergonzosas gestas intervencionistas de un pasado que parecía enterrado en Vietnam.

La intervención del gobierno de los Estados Unidos ha ido escalando a medida que el proyecto en apariencia centrista y reformista, que consideraba como la solución teórica ideal para El Salvador, ha ido perdiendo posibilidades históricas. Cuando más inviable resulta, más ayuda e intervención extranjera necesita para subsistir. Algunos políticos norteamericanos, por falta de imaginación, por pura ignorancia o por terquedad interesada, se la están dando generosamente, en una lucha desesperada contra la historia y contra la voluntad de un pueblo decidido a conquistar su independencia.

La solución popular, en estado más o menos puro, tal como se ofrece en el Proyecto del Frente Democrático Revolucionario, les parece a los gobernantes norteamericanos una alternativa inaceptable, que a largo plazo aumentaría el poder de las fuerzas no alineadas y anti-imperialistas en el "Mare Nostrum" del imperio y acumularía potencial revolucionario entre los dos polos petroleros de México y Venezuela. Tratan pues de desactivar este poder explosivo con una solución "venezolana" precisamente (más que "mexicana"), consistente en pacificar al país derrotando a la guerrilla para arrojar democracia burguesa (o democracia cristiana) sobre las heridas. Pero, con gran falta de sentido histórico, no se percatan de que ni las condiciones objetivas ni el proceso de la conciencia popular en El Salvador y en Centroamérica toleran ya las medias tintas de una solución "gatopardista" (centrista). En este sentido, la intervención del gobierno de los Estados Unidos en El Salvador y en toda el área es una carrera a contrapelo de la historia, que, aunque lograra detenerla por algún tiempo en algunos lugares, no logrará en definitiva alterar su curso hacia una Centroamérica popular e independiente, no alineada y anti-imperialista.

En vez de considerar la alternativa popular y negociar con el Frente Democrático Revolucionario una futura relación entre Estados Unidos y El Salvador, equilibrada y no antagónica, en vez de ganarse el



respeto y la consideración de un gobierno democrático revolucionario y de un pueblo generoso, se empecina la administración norteamericana, siempre barrida por los aires de la guerra fría, en oponerse a los movimientos más genuinamente populares y en apoyar a un partido sin bases ni raíces y a una Fuerza Armada contaminada en sectores importantes por un pasado de corrupción y represión.

Así pues, la intervención del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de El Salvador es no solamente injusta y violadora del orden jurídico internacional, sino también poco prudente y contraria a la marcha de la historia. Está además en franca contradicción con la teoría, propagada y defendida por los Estados Unidos en los últimos años, sobre derechos humanos.

En efecto, la apreciación subjetiva de una amenaza para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en el proyecto popular de El Salvador, hace olvidar a los hombres del Departamento de Estado todos los sermones de Carter sobre los derechos humanos, todas las denuncias contra la intervención soviética en Afganistán, y tomar el curso pragmático y fácil de intervenir en un país tan pequeño y tan cercano como El Salvador, cubriendo con palabras falaces la injuria hecha al derecho de auto-determinación de los pueblos y a la dignidad del pueblo salvadoreño. Una de estas falacias consiste en afirmar la presencia de extranjeros en la parte de las guerrillas, lo que justificaría una intervención de naturaleza compensatoria de parte de la Junta de Gobierno. Tal intervención de cubanos y nicaragüenses —todavía no se han mencionado rusos ni chinos— no ha podido ser demostrada por nadie, a pesar de lo sumamente conveniente que resultaría a los planes de los norteamericanos.

Desde nuestro punto de vista, como salvadoreños y cristianos, la intervención norteamericana en sí y en cuanto apoyo a un proyecto político sin ninguna esperanza para las mayorías de nuestro pueblo nos merece el más indignado rechazo. No parecen medir algunos gobernantes de los Estados Unidos el dolor y la muerte que están causando en nuestro pueblo por seguir unas políticas simplistas, poco imaginativas y de poca altura ética. No parecen importarles los miles de víctimas inocentes que su desesperada y anti-histórica acción está causando directa e indirectamente. Daría la impresión de que unos cuantos miles de muertos les parece un precio adecuado por la contención en El Salvador de los movimientos populares de liberación y por el mantenimiento de una dictadura anti-comunista.

Nos parece una monstruosidad que los políticos norteamericanos discutan públicamente sobre el régimen que más les conviene en El Salvador, como si estuvieran hablando de los arreglos que van a hacer en el jardín de su casa o sobre la escuela a que van a mandar a sus hijos. ¿Les será posible comprender los sentimientos que despiertan en el pueblo salvadoreño esas pláticas arrogantes y carentes de todo respeto por un país pequeño y pobre, pero igual a cualquiera en dignidad? Pero, lo que es peor, nos parece monstruoso no sólo que se discuta fría y académicamente sobre los destinos de un pueblo soberano, sino que se pase a la intervención en sus asuntos internos, tratando de frustrar las aspiraciones y esperanzas de unas mayorías que han decidido con toda razón y justicia salir por fin del estado de opresión y miseria en que se encuentran.



Tales actitudes, palabras y acciones de los gobernantes de los Estados Unidos, contrarias a los principios en que se basa la convivencia internacional y a los principios cristianos, les priva de toda autoridad moral para actuar en el campo internacional. ¿Con qué autoridad podrá el gobierno de los Estados Unidos exigir a la Unión Soviética que no intervenga en Polonia y que se retire de Afganistán, cuando él mismo no tiene escrúpulo alguno en hacerlo en un país con una importancia estratégica relativamente menor?

No podemos menos de llamar la atención sobre un aspecto más que agrava considerablemente la intervención del gobierno de los Estados Unidos en el proceso salvadoreño: el hecho de que esta intervención tiende por su naturaleza a regionalizar el conflicto. En efecto, tanto si la intervención norteamericana se hace con los ejércitos serviles de Guatemala y Honduras como si se hace con sus propios soldados, Nicaragua se verá amenazada y empujada a defender su revolución y su integridad territorial con las armas en la mano. ¿Tanto peligro ve el Departamento de Estado en la alternativa del FDR que está dispuesto a encender la guerra en todo Centroamérica y el Caribe, guerra ante la que la Unión Soviética no podrá permanecer inactiva?

Debe considerar el gobierno de los Estados Unidos que una escalada de la intervención en los asuntos internos de nuestro país no puede menos de provocar una creciente incorporación de la población a la lucha anti-imperialista y que, ante una invasión de El Salvador por tropas extranjeras, regulares o mercenarias, se pondrían en pie de guerra miles de patriotas que se mantienen ahora como observadores del conflicto. La intervención, se mire por donde se mire, no hace —y no hará— más que agravar el conflicto, enconar la lucha, aumentar las proporciones de la guerra y en definitiva sembrar más muerte y destrucción en El Salvador y Centroamérica, haciendo prácticamente imposible un futuro pacífico, estable y libre de odios. La opción que tiene ante sí el gobierno de los Estados Unidos en lo que respecta a Centroamérica no es, desde su punto de vista, clara ni unívoca; como toda opción, encierra riesgos y problemas. Pero una cosa debería tener clara a estas alturas de la historia: que su intervención en el proceso político salvadoreño está condenada al fracaso final y les va a ocasionar graves costos en prestigio y liderazgo moral contra unos efímeros y magros beneficios que se llevará el viento.

Por otro lado, el pueblo salvadoreño podría alcanzar pronto sus ideales de paz, justicia y libertad, que no tienen por qué representar un peligro para nadie, si el gobierno de los Estados Unidos se mantuviera por lo menos neutral en el conflicto interno de El Salvador y los alcanzaría mucho más rápida y justamente, si se solidarizaran como otras veces han hecho con la lucha mayoritaria de un pueblo oprimido e injustamente tratado por siglos. Otros países también capitalistas así lo hacen y muestran con ello su fe sincera en la democracia y su compromiso por la justicia. Estamos seguros de que la mayoría del pueblo de los Estados Unidos, si estuviera debidamente informado y orientado, no vacilaría, como ya lo hacen muchos grupos, en solidarizarse con las justas luchas del pueblo salvadoreño contra una de las peores tiranías de América Latina.